

JOSÉ MANUEL CASTILLO VILLA

La responsabilidad en la gestión sanitaria es compartida, pero el máximo grado de culpa recae en los responsables porque existe un total distanciamiento entre ellos y los trabajadores

No deja de ser penoso que una gran y feliz noticia para toda Cantabria, como el reciente anuncio de los plazos de finalización del nuevo hospital de Valdecilla, tenga como fondo las legítimas protestas de los sindicatos contra la privatización de archivos del propio centro hospitalario.

De todos modos, este afán privatizador de los gestores de la sanidad pública y la airada respuesta de sindicatos, trabajadores y ciudadanos, como la de la manifestación del pasado 21 de mayo, forman parte de situaciones de conflicto que resultan ya, por desgracia, habituales en la historia reciente de la sanidad cántabra, no sólo por la cesión de lo público a lo privado, y pese a que ésta haya mejorado en números y cifras desde la creación del Servicio Cántabro de Salud.

De hecho, hay más recursos materiales y humanos, mejores condiciones laborales, se ha creado empleo e infraestructura y el futuro no es del todo oscuro si se confirma la prometida red de hospitales y centros de salud modernos y bien dotados para nuestras necesidades sanitarias. Un claro ejemplo será la conclusión de los hospitales de Valdecilla y de Campoo.

Ahora bien, otro capítulo bien distinto será la sostenibilidad económica de toda esta infraestructura, máxime con los tiempos de crisis que vivimos y que se vislumbran a corto plazo.

A pesar de todos estos avances en las políticas sanitarias, en los que UGT ha puesto su granito de arena con sus propias propuestas y su participación en las negociaciones, habría que preguntarse por qué todas estas mejoras han sido percibidas en líneas generales, tanto por profesionales de la sanidad como por ciudadanos, con acritud, crítica y en muchos casos claros ninguneos.

¿Quiénes son los responsables de esta negativa percepción?. Como nadie es inocente, deberá reconocerse que algo de culpa corresponde a los sindicatos, que siempre buscamos el máximo rendimiento en nuestras negociaciones y, aunque logremos mejoras, siempre son vistas por muchos trabajado-

res y más, entre colectivos laborales tan diversos y con variados intereses como los de la sanidad pública.

De todos modos, el máximo grado de culpa recae en los gestores de la sanidad pública de Cantabria porque existe un total distanciamiento entre ellos y los trabajadores del sistema, en muchos casos propiciada por la prepotencia y en otros por una criticable tendencia a escurrir responsabilidades propias en la gestión, transfiriéndolas a otros y, sobre todo, criminalizando de una manera generalizada a los profesionales que trabajamos en la sanidad pública.

Es un síntoma que en UGT nos empieza

a molestar. Ejemplos recientes tenemos en abundancia y por citar sólo algunos cabe recordar que se privatiza una unidad de archivos porque sus trabajadores «son vagos y absentistas»; el gasto sanitario en farmacia es insostenible por que hay «30 médicos» que recetan más de la cuenta; o las listas de espera siempre son culpa de los profesionales de los quirófanos porque son poco eficientes.

Por desgracia, este tipo de manifestaciones públicas, cada vez más frecuentes en los últimos años, sólo consiguen menoscabar la confianza en este servicio público esencial.

Otra característica de esta Administra-

ción sanitaria es su incapacidad para abordar con soltura los problemas y precariedades de los 8.500 profesionales del Servicio Cántabro de Salud y los de muchos ciudadanos que quieren acceder como trabajadores a este sistema de salud, fundamentalmente, porque se ha mantenido la misma infraestructura cuando la competencia recaía en el Ministerio de Sanidad.

Aquí también los ejemplos son más que significativos: listas de contrataciones que tardan años en salir y ser operativas; oferta de empleo público en curso, como la de 2007, no convocada en su totalidad y sin garantías fiables de saber cuándo serán examinados los opositores; concursos de traslados que tardan año y medio en resolverse...

En UGT creemos que esto debe mejorar para conseguir la credibilidad suficiente que a la Administración pública se le supone. Y encima, ahora con la crisis nos anuncian medidas correctoras y son una buena excusa para incumplir selectivamente los pactos firmados en su momento con los sindicatos.

Tal vez sea más necesario que nunca un gran pacto en la sanidad regional que nuestro sindicato propone para afrontar esta época de crisis económica que se avecina y padecemos ya.

Un pacto que priorice las necesidades; que inicie la austeridad con la que se nos amenaza por los propios cargos ejecutivos y su corte de allegados, multiplicados estos últimos años sin que por ello se haya aportado más eficiencia al sistema; que potencie lo público y cese con el creciente ánimo privatizador de nuestros gestores sanitarios; y que acabe de una vez por todas con las descalificaciones a los profesionales del SCS y su subsiguiente desprestigio ante la opinión pública.

Se quiera o no, los que al final mantienen en el día a día la asistencia sanitaria son sus profesionales, no unos gestores que recurren a la descalificación de los demás por eludir su propia responsabilidad y la autocrítica.

